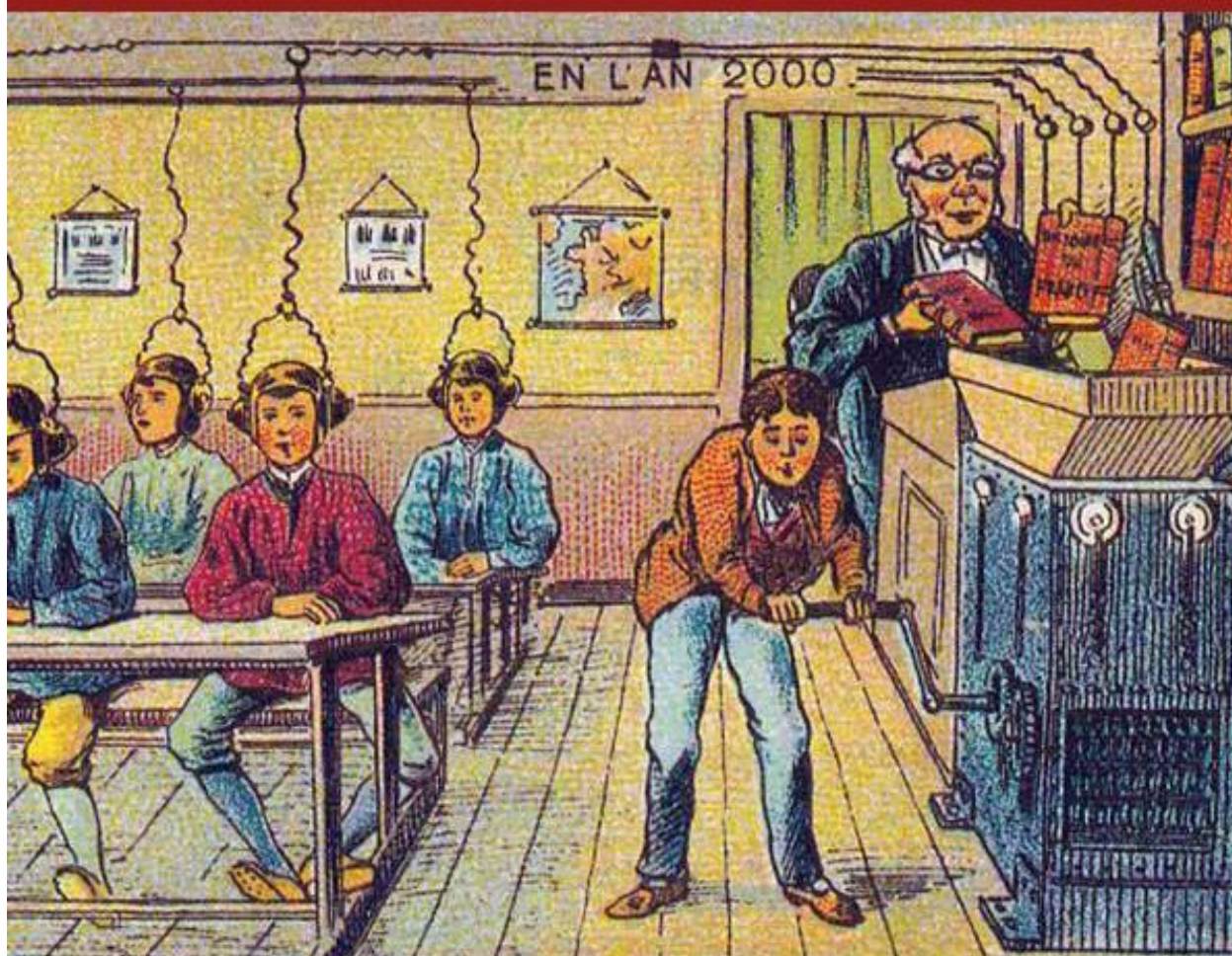


Asociación de Historia Contemporánea  
Actas del XIV Congreso

***DEL SIGLO XIX AL XXI. TENDENCIAS Y DEBATES***  
(Alicante, 20-22 de septiembre de 2018)

Mónica Moreno Seco (coord.)  
Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)



**BIBLIOTECA VIRTUAL  
MIGUEL DE CERVANTES**  
[www.cervantesvirtual.com](http://www.cervantesvirtual.com)

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
Alicante, 2019

Asociación de Historia Contemporánea. Congreso (14.º. 2018. Alicante)

*Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante 20-22 de septiembre de 2018 / Mónica Moreno Seco (coord.) & Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)*

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2019. 2019 pp.

ISBN: 978-84-17422-62-2

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019.

Este libro está sujeto a una licencia de “Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)” de Creative Commons.



© 2019, Asociación de Historia Contemporánea. Congreso

Algunos derechos reservados

ISBN: 978-84-17422-62-2

Portada: *At School*, Jean-Marc Côté, h. 1900.

## B. Postguerras, políticas sociales y culturales

### JUECES, JURADOS Y... VÍCTIMAS: TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ANTE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO DURANTE LA GUERRA Y LA POSGUERRA EN VALENCIA

José Antonio Abad Labrador  
(Universitat de València)

#### Introducción. Los Jurados Mixtos y las Magistraturas de trabajo: más allá del Derecho

Decía Antoine Prost que el historiador no puede hacer una lectura definitiva de los documentos, ya que siempre podrá interrogarlos con otras preguntas. Esta afirmación es especialmente pertinente para este trabajo si tenemos en cuenta que buena parte de los estudios llevados a cabo sobre los expedientes de los Jurados Mixtos y las Magistraturas de Trabajo han sido realizados desde una perspectiva jurídica centrada, por tanto, en el ámbito del Derecho. Tal es el caso del minucioso estudio realizado por Mario F. Quirós sobre la documentación de los Jurados Mixtos de Valencia, centrado en su actividad jurisdiccional, el tiempo de tramitación y el incumplimiento de las resoluciones de estos jurados. Más reciente es la tesis de José Marín sobre las Magistraturas de Trabajo implantadas en la provincia de Murcia. También desde el derecho, pero con una mayor atención a lo social, su autor realiza un ambicioso recorrido por los principios laborales y sociales del régimen<sup>6203</sup>. Desde la perspectiva histórica se han realizado trabajos a nivel local centrados fundamentalmente en las condiciones laborales a partir del análisis de las bases de trabajo negociadas a través de los Jurados Mixtos, y en el aspecto cuantitativo<sup>6204</sup> (evolución del número de demandas y porcentaje que ocupan determinadas causas de despido o de infracciones), tanto en el caso de estos como en el de las Magistraturas del Trabajo. Tan solo, que yo conozca, Pablo García Colmenares ha estudiado las Magistraturas desde un punto de vista no cuantitativo, centrándose en las condiciones laborales (y culturales) a las que se vio sometida la mujer delante de estos tribunales<sup>6205</sup>. En el caso de las Magistraturas y el derecho laboral franquista, disponemos de trabajos muy completos de juristas como Josefa D. Ruiz Resa o Cristóbal Molina y de aportaciones de historiadores como José Babiano<sup>6206</sup>.

---

<sup>6203</sup> Mario Francisco QUIRÓS SORO: *Los jurados mixtos del trabajo (1931-1939)*, València, Universitat de València, 2007; Anterior, pero en la misma línea de análisis jurídico, destaca Juan MONTERO AROCA: *Los tribunales de trabajo (1908-1938): jurisdiccionales especiales y movimiento obrero*, Valencia, Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones, 1976. José MARÍN MARÍN: *Orígenes de la magistratura del trabajo en España. Especial referencia a su implantación en Murcia (1939-1940)*, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2015.

<sup>6204</sup> Manuel REQUENA: «Los jurados mixtos de trabajo en la provincia de Albacete durante la II República», *Historia social*, 33 (1999), pp. 97-110; Luis GARRIDO GONZÁLEZ: «Legislación social y conflictos laborales en la provincia de Jaén (1931-1933)», en José Luis GARCÍA DELGADO y Manuel TUÑÓN DE LARA (eds.): *La Segunda República en el primer bienio: III Coloquio de Segovia sobre Historia contemporánea de España*, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1987, pp. 95-119.

<sup>6205</sup> Pablo GARCÍA COLMENARES: «Mujeres ante la Magistratura de Trabajo. Nuevas fuentes para el estudio de las trabajadoras durante el Primer Franquismo», en: M.<sup>a</sup> Jesús DUEÑAS *et al.* (coords.): *La historia de las mujeres: una revisión historiográfica*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 393-420.

<sup>6206</sup> Josefa Dolores RUIZ RESA: *Los derechos de los trabajadores*, Madrid, Dykinson, 2015; e ÍD.: *Trabajo y franquismo*, Granada, Comares, 1999. Cristóbal MOLINA: «Legislación social y franquismo: evolución del 'modelo autoritario-paternalista' de relaciones laborales en el Estado Nacional Sindicalista», en Salvador CRUZ y Julio

Ahora bien, un análisis que vaya más allá de las cifras y del Derecho permite explorar dos de los terrenos más cultivados por la actual historiografía sobre el franquismo: las actitudes de los trabajadores y la política social de la dictadura. Efectivamente, los expedientes tanto de los Jurados Mixtos como de las Magistraturas de Trabajo permiten seguir el recorrido del pleito, desde la denuncia del trabajador, a veces siguiendo el procedimiento formal y otras por medio de cartas que constituyen auténticos relatos de la vida en la retaguardia y la posguerra, hasta la sentencia elaborada por el presidente del tribunal en función de la política social vigente, bien de la República democrática, bien del régimen dictatorial<sup>6207</sup>, pasando por el acta de conciliación y (en caso de no avenencia) el acta de juicio, en el que ambas partes (trabajador y empresario) podían presentar pruebas y testigos. Por todos es sabido que, durante el franquismo, la huelga fue considerada una patología social y el entramado sindical obrero fue criminalizado y sustituido por el encuadramiento obligatorio en la organización corporativa del Sindicato Vertical. Por tanto, y como afirma, José Babiano, «al quedar descartada la autonomía colectiva de las partes, el único tipo de conflicto contemplado por el Estado era el de carácter individual»<sup>6208</sup>, sobre el que resolvió las Magistraturas hasta 1958, año en que se decreta la ley de Convenios Colectivos. Dicho de otra manera, hasta las primeras grandes huelgas de Bilbao y Barcelona, la única forma de expresar el descontento hacia el régimen (ya que ir a juicio suponía desestimar el parecer del Sindicato Vertical y, como veremos, protestar por la miseria en las condiciones de vida) fue la denuncia individual ante las Magistraturas de Trabajo, por lo que no es extraño que algunos historiadores hayan llegado a considerarla como un «acto de coraje», un gesto de «desesperada rebeldía»<sup>6209</sup>, de «protesta individual»<sup>6210</sup>, «reflejo del descontento social y laboral de la clase obrera»<sup>6211</sup>. A mi modo de ver, las denuncias de los trabajadores constituyen, para el historiador, una ventana abierta a las actitudes y el modo de actuar de lo que se ha dado en llamar «gente corriente»<sup>6212</sup> o no militante. Estas actuaciones estaban condicionadas por factores culturales e ideológicos, como las denuncias políticas contra los propios patronos para encauzar la demanda, pero no creo que debamos descuidar el componente materialista de estas denuncias (en este texto sí por razones de espacio), dado que los expedientes permiten explorar las condiciones de trabajo (salarios, horario laboral, deudas, seguros...) durante la guerra y la posguerra. Por otro lado, las sentencias de los expedientes son una fuente riquísima de información acerca del funcionamiento real, no solo normativo o discursivo, de una institución capital de la política social de todo régimen, democrático o dictatorial, como son los tribunales de trabajo. No en vano, Menéndez Pidal podía afirmar en 1947 que «el Magistrado de Trabajo puede decirse que es la puerta por donde pasan las Leyes desde las páginas del periódico oficial a la realidad de la vida»<sup>6213</sup>. Tanto los Jurados Mixtos de la Segunda República como las Magistraturas de Trabajo del franquismo fueron instituciones de derecho público encargadas de la mediación y el arbitraje entre capital y trabajo. Convendría

---

PONCE (coords.): *El mundo del trabajo en la conquista de las libertades*, Jaén, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2011, pp. 115-156. José BABIANO: «Mercado de trabajo y relaciones laborales durante el franquismo», en: *Ibid.*, pp. 157-179. Véase también de este autor ÍD.: *Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998.

<sup>6207</sup> Esto da pie a la comparativa entre ambos regímenes: Alfredo MONTROYA MELGAR: *Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-1978)*, Madrid, Civitas, 1992, pp. 203-325.

<sup>6208</sup> José BABIANO: *Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)*, Madrid, Consejo Económico y Social, 1998, p. 50.

<sup>6209</sup> Ismael SAZ y José Alberto GÓMEZ RODA (eds.): *El franquismo en Valencia: formas de vida y actitudes sociales en la posguerra*, Valencia, Episteme, 1999, p. 60.

<sup>6210</sup> José BABIANO: *Emigrantes, cronómetros y huelgas: un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1995, p. 216.

<sup>6211</sup> Pablo GARCÍA COLMENARES: «Mujeres ante la Magistratura...», p. 400.

<sup>6212</sup> Término («trabajadores corrientes») ya utilizado por los trabajos de Ismael Saz y Alberto Gómez Roda sobre el franquismo en Valencia.

<sup>6213</sup> Juan MENÉNDEZ PIDAL: *Derecho Procesal Social*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1947, p. 106.

no infravalorar la importancia de estos órganos en un contexto, primero, de una República que fue proclamada como «democrática de trabajadores de toda clase», de una Guerra Civil y la actuación revolucionaria paralela que alteraron profundamente las relaciones laborales, y de una Dictadura que tenía entre sus objetivos la desactivación del movimiento obrero y la lucha de clases. La tercera y última línea de análisis, después de las actitudes de los trabajadores y la política social, prestará atención a los expedientes que impliquen a las mujeres trabajadoras con el objetivo de estudiar su situación laboral y la represión o marginación que las mismas sufrieron por razones de género, teniendo en cuenta la máxima del régimen sobre las mujeres trabajadoras: «El Estado (...) libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica»<sup>6214</sup>.

### **Trabajadores ante los tribunales: jueces, jurados... y víctimas**

La historiografía del franquismo ha prestado mayor atención a las denuncias ante los tribunales militares que ante los tribunales de trabajo. Evidentemente, las consecuencias que podían traer unas y otras son muy diferentes. Las primeras podían suponer el encarcelamiento o la pena de muerte, mientras que las segundas tenían como mal mayor un despido. Existen, sin embargo, características comunes entre ambos tipos de denuncias. Ambas procedían de «gente corriente», de ciudadanos comunes. Ciudadanos que conocían y compartían la cultura y el significado ideológico de la guerra<sup>6215</sup>, es decir, sabían perfectamente las retribuciones o castigos que implicaba ser o no afecto al régimen. Tanto a la República, como a la dictadura. En una denuncia ante los Jurados Mixtos de la Segunda República, el joven panadero Rafael Juan Selva, de tan solo 17 años, denunciaba a su patrono en plena guerra civil por un despido injustificado, pero alegaba que «además he luchado voluntariamente por el régimen republicano defendiendo a su gobierno legítimo; mientras que el citado patrono nunca ha ayudado a la república puesto que nunca ha votado para ella ni pertenece a ninguna sociedad (...) nunca ha sido afecto al régimen el patrono y que dijo que me despedía porque no quiere tener un espía»<sup>6216</sup>. La acusación al patrono de desleal al régimen poco tenía que ver con las relaciones laborales y la legislación social vigente.

Ahora bien, conviene señalar aquí otra diferencia fundamental entre las denuncias ante el tribunal militar y ante los tribunales de trabajo. En el primer caso, las denuncias tenían un fin en sí mismo, para el cual había sido creado dicho tribunal: la represión militar por motivos políticos. Bastaba en muchos casos con que el denunciante fuera afecto al régimen para dar credibilidad a la delación. En el caso de las denuncias laborales, el fin no era la represión física, y la justificación de la denuncia se amparaba en el derecho laboral -de hecho era obligatorio remitirse a los artículos de la legislación correspondiente- y no en motivaciones políticas. Otra cosa es que detrás de los despidos o las deudas salariales hubiese, en realidad y he aquí lo interesante, motivos políticos. Durante la guerra civil, para muchos trabajadores la causa real de su despido era «represalias» o «personales», como señalaban en el apartado 4.º del formulario de denuncia («Que, por el contrario, el que suscribe considera que las causas determinadas del despido han sido...»). Tal es el caso de los sombrereros José Villaplana Sanchís y Vicente Casa Segura, quienes consideraron que «la causa determinante del despido ha sido por asuntos políticos y querer colocar a otro en mi sitio», pese a los argumentos económicos que proporciona la dueña de la sombrerería «Hija de

---

<sup>6214</sup> Decreto del 9 de marzo de 1938. Fuero del Trabajo, Cap. II, Art. 1.º, Burgos, 1938 (BOE de 10 de marzo de 1938, p. 6.179).

<sup>6215</sup> Miguel Ángel DEL ARCO BLANCO y Peter ANDERSON: «Construyendo la dictadura y castigando a sus enemigos. Represión y apoyos sociales del franquismo (1936-1951)», *Historia Social*, 71 (2011), pp. 125-141.

<sup>6216</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Panadería (Valencia, 14 de mayo de 1937), Archivo del Reino de Valencia (ARV), 197, exp. 7.751.



Carmelo Soler»<sup>6217</sup>. No cabe duda, pues, que muchos aprovecharon ese contexto de guerra para encauzar la demanda a su favor proporcionando información política o ideológica condenatoria de la otra parte. Así, la UGT, Sociedad de Oficiales Panaderos «El Avance» de Villanueva de Castellón, intervino en un caso de avenencia entre el trabajador y el empresario dado que consideraban que el trabajador no merecía su readmisión al puesto de panadero, tal como había sido acordado en el acto de conciliación, «ya que repetidas veces fue llamado al orden puesto que su proceder, contrario a la lealtad que merece nuestro gobierno, fijaba directa y claramente su pensar y también su colaboración fascista»<sup>6218</sup>.

Una vez acabada la guerra, las Magistraturas de Trabajo creadas por el franquismo llevaron al extremo la politización de los tribunales de trabajo. De lo que se trataba en este caso era de demostrar la afección al nuevo régimen franquista, o la desafección a la parte contraria. La dependiente de una pastelería, Patrocinio Faus, demandó a su jefe, Andrés Gadea, por reclamación de salarios. En un primer momento, cuando aún regía la autoridad republicana de los Jurados Mixtos, la sentencia fue favorable, pero posteriormente el caso fue reabierto por la Magistratura de Trabajo. En una comparecencia en la que solo intervino el demandado Andrés Gadea, este fue interrogado «acerca de si considera desafecta al Glorioso Movimiento Nacional a la (...) demandante contesta que desafecta (...) Interrogado acerca de si se le ha ocasionado prejuicio económico directo por la demandante contesta afirmativamente por el desorden que reinaba en el establecimiento durante el periodo de dominación marxista». Finalmente, Patrocinio fue sancionada con un mes de suspensión de empleo y sueldo, y uno más de sueldo<sup>6219</sup>.

Para evitar las denuncias o las sospechas, muchos trabajadores aprovechaban el espacio de las actas de denuncia (o enviaban directamente cartas) para mostrar una retórica amable con el régimen franquista, bien a través de fórmulas recurrentes como «Arriba España», «Saludos a Franco» o «Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista»<sup>6220</sup>; bien pidiendo perdón al régimen explícitamente por actos tan nimios, quizás aplicables a pequeños actos de rebeldía, como cambiar la palabra «suprema» por «enferma» en un titular sobre Franco y la patria del periódico *Levante*: «el mucho trabajo, el retraso, ánimo deprimido, edad, etc., fueron causa de pasarse la fatal palabra. Juro por mi vida no haber tenido la intención de mortificar a nuestro glorioso Caudillo -¡Perdón!»<sup>6221</sup>.

Si bien se ha afirmado, y no lo discuto, que las Magistraturas fallaron mayoritariamente a favor de las empresas<sup>6222</sup>, los patronos también fueron denunciados por los trabajadores por motivos políticos. El cortador Manuel de Molina denunció el despido injustificado de su puesto debido, según él, a «haberme incorporado al MOVIMIENTO COMO SECRETARIO DEL GOBERNADOR MILITAR EN CAPITANÍA GENERAL y haber estado prestando servicios COMO CAMISA VIEJA QUE SOY hasta que quise reincorporarme». El trabajador terminaba denunciando al patrono como izquierdista y desafecto: «es FUNDADOR Y MIEMBRO DEL PARTIT VALENCIANISTA DE ESQUERRA, NO HABIENDO QUITADO EL EMBLEMA DE SU SOLAPA HASTA EL DÍA 29 por la mañana»<sup>6223</sup> (mayúsculas suyas). En un caso muy similar, Exuperio Martínez, trabajador despedido de la fábrica de papel «La Papelera Española», denuncia

<sup>6217</sup> Jurados Mixtos. Vestido y tocado. Sombrereros (Valencia, 26 de mayo de 1936), ARV, 307, exp. 12.207.

<sup>6218</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Panadería (Valencia, 21 de mayo de 1937), ARV, 197, exp. 7.752.

<sup>6219</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Pastelería (Valencia, 21 de agosto de 1939), ARV, 198, exp. 7.788.

<sup>6220</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 27 de septiembre de 1939), ARV, 503, exp. 1.109; Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 14 de agosto de 1939), ARV, 500, exp. 877.

<sup>6221</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 6 de octubre de 1939), ARV, 1.074, exp. 1.156.

<sup>6222</sup> José BABIANO: «Mercado de trabajo y relaciones laborales durante el franquismo», en Salvador CRUZ y Julio PONCE (coords.): *El mundo del trabajo...*, p. 171.

<sup>6223</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 26 de septiembre de 1939), ARV, 502, exp. 1.103.

a su patrono por desafecto mientras exhibe su fidelidad al régimen con el objetivo de inclinar a su favor la balanza de la justicia: «... en esta interinidad, he lanzado varias veces y con motivos oportunos ‘Vivas patrióticos’ y hasta ‘muera a la Masonería’, que dentro del local ocasionaron con dicho Sr. Huici (el patrono denunciado) un diálogo replicándole que quitase la Efigie del Caudillo de la oficina ya que no parecía muy identificado con Franco (...) El día 19 signifiqué a mis citados compañeros mi indignación también, porque al aludido jefe Sr. Huici, diseminando el grupo de la comida solemne del día anterior, ensombrecida por su preocupación íntima, impidió que tanto al principio como al fin de la misma, se leyese las consignas gloriosas que nuestro Invicto Caudillo encareció»<sup>6224</sup>. En ambos casos, sin embargo, la denuncia fue desistida por acuerdo de las partes.

En cualquier caso, existen evidencias en la documentación aquí trabajada de que las Magistraturas jugaron un papel disciplinario fundamental en la subordinación y control de la mano de obra, como ha puesto de relieve la historiografía sobre el franquismo. Podría hablarse, incluso, de las Magistraturas como órgano de represión socioeconómico, en tanto que muchos trabajadores fueron depurados de su puesto laboral, despedidos por causas políticas y sustituidos por los excombatientes y afectos al régimen, privándoles así de su principal sustento de vida, el salario, y redistribuyendo la propiedad social que constituían los seguros hacia el personal afecto al régimen. No creemos que se tratara de una represión premeditada para degradar las condiciones de vida de la población, y con ello, castigarla. Ni mucho menos que Valencia, por el simple hecho de permanecer en zona republicana hasta el final de la guerra, fuera objeto de castigo por parte del régimen, como así se creía en el imaginario popular<sup>6225</sup>. Pero sí que existió coherencia y continuidad entre las prácticas delatoras de la «cultura de guerra» y la posguerra<sup>6226</sup>, como hemos visto. Ya durante la guerra encontramos algunos despidos por la pertenencia a un sindicato del trabajador en cuestión. Un caso es paradigmático: Isidra Martínez Valeriano, camarera en la Pensión Fortuna de Valencia, denuncia que su despido se debía a que su jefa «no quería tener personal asociado a ninguna organización sindical». Durante el juicio, la testigo Francisca Albial Bacué, también camarera, afirmó haber oído a la patrona demandada justificar los despidos diciendo que «por ser una industria libre podía tener el personal que le diese la gana y que ya vendrían días en que se podría hacer callar a los sindicatos»<sup>6227</sup>. Y tanto que llegaron esos días. Las Magistraturas consagraron la asimetría entre el mundo del capital y el trabajo abierta ya con la imposición del sindicato único. Así pues, los propietarios de las empresas aprovecharon a fondo las ventajas que les brindaba el nuevo Estado. Las depuraciones laborales decretadas el 5 de diciembre de 1936 para los empleados públicos y extendidas a las empresas privadas el 17 de agosto de 1937, son buena prueba de ello, hasta el punto de que las autoridades franquistas se vieron obligadas a intervenir ante la «fiebre depuradora» que tuvo lugar, por ejemplo, en Barcelona el mes de marzo de 1939<sup>6228</sup>. En el caso de Valencia, la Magistratura intervino en diversas ocasiones contra la arbitrariedad de las empresas. Tal es el caso de la Unión Naval de Levante, «Astilleros», una de las grandes industrias de construcción naval a nivel nacional, llegando a emplear unos 3.000 trabajadores solo en Valencia. La citada empresa denuncia los antecedentes políticos del demandante y de otros trabajadores a los que se niega a readmitir: «De filiación política revolucionaria en grado sumo y parece ser que el Claur (uno de los trabajadores

---

<sup>6224</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 14 de agosto de 1939), ARV, 500, exp. 881.

<sup>6225</sup> Ismael SAZ: *Fascismo y franquismo*, València, Universitat de València, 2004, pp. 208-209.

<sup>6226</sup> Esta es la tesis de Michael Richards, a veces malinterpretada en el sentido que hemos cuestionado de programa definido de represión. Michael RICHARDS: *Un tiempo de silencio: la guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945*, Barcelona, Crítica, 1999.

<sup>6227</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Camareros (Valencia, 6 de mayo de 1938), ARV, 186, exp. 6.639.

<sup>6228</sup> Carme MOLINERO y Pere YSÀS: «Productores disciplinados: control y represión laboral durante el franquismo (1939-1958)», *Cuadernos de Relaciones laborales*, 3 (1993), pp. 33-50, esp. pp. 45-47.

despedidos) ha sido uno de los Jefes del Ateneo Libertario de la Avenida del Puerto, durante el periodo rojo, auxiliado por los dos restantes». Sin embargo, la Magistratura acaba decretando el despido como ilegal ante la caducidad del decreto de depuraciones y la falta de pruebas: «CONSIDERANDO que no ha sido probado en juicio los malos antecedentes políticos de la parte actora, y que por otra parte la depuración del personal ha debido hacerse dentro de los tres meses de la liberación de esta plaza (...) la no admisión al trabajo debe ser conceptuada ilegal»<sup>6229</sup>.

Otra prueba de la asimetría de las relaciones laborales que trajo el franquismo es la avalancha de recursos o revisiones presentadas por las empresas en contra de las decisiones aprobadas durante la guerra por los Jurados Mixtos, especialmente en lo que refiere a los seguros por accidentes de trabajo. Estos recursos se presentaban aprovechando la aprobación del Decreto del 1 de noviembre de 1936, según el cual «la naturaleza del Movimiento Nacional no necesita de normas derogatorias para declarar expresamente anuladas todas cuantas se generaron por aquellos órganos que, revisitados de una falsa existencia legal, mantuvieron un ficticio funcionamiento puesto al servicio de la anti-patria»<sup>6230</sup>. Con ello se daba la vuelta a la justicia imperante durante el régimen republicano. Ahora son los empresarios y las aseguradoras los que aparecen masivamente en los expedientes como demandantes, y los obreros, como demandados. Así, MAPFRE alega en uno de sus recursos que «en dicha época nuestra Entidad había dejado de funcionar normalmente por encontrarse su Central y la Delegación de Valencia incautadas por elementos marxistas de un titulado Comité de Control (...) la resolución (...) recayera dictada con manifiesto abuso de poder por parte de las pretendidas autoridades rojas...»<sup>6231</sup>. En otros recursos se hablaba de «las circunstancias anormales en que vivía España en aquellos tiempos y las coacciones y amenazas con que se actuaba en los Tribunales rojos» para justificar la nulidad de la sentencia favorable al obrero<sup>6232</sup>. Es curioso que se cuestionase la legalidad republicana durante la guerra por estar sometida a las autoridades socialistas, cuando las Magistraturas del franquismo eran órganos directamente subordinados al ministro de Trabajo, o cuando muchos juristas dejaban clara constancia de la parcialidad de la justicia franquista: «Nos colocamos en un punto de vista fundamentalmente jurídico, pero sin dejar, cuando es posible, de sacar de la ciencia del Derecho y de su aplicación a los problemas que estudiamos, el provecho que se puede en un sentido de servicio a los altos ideales del Movimiento Nacional»<sup>6233</sup>. El Derecho es descrito claramente aquí como subordinado a la ideología del régimen.

Ante este panorama favorable a la empresa, la actitud de los trabajadores fue de retracción y miedo a denunciar. Lo vemos en el descenso del número de demandas, y en los informes de algunos inspectores de trabajo: «muchos trabajadores perjudicados en sus legítimos derechos por los empresarios (...) dejan de ejercitar sin embargo las acciones contenciosas que les competen ante la Magistratura Provincial de Trabajo correspondientes (...) por temor a las represalias de que fácilmente pueden ser víctimas»<sup>6234</sup>. Efectivamente, una declaración en contra de la empresa podría acarrear represalias, pues el patrón podría considerarle desleal, al amparo del régimen castrense del principio de autoridad de la empresa estipulado por el Fuero del Trabajo. Hemos encontrado evidencias documentales de esos temores de los trabajadores, y de las amenazas lanzadas por los empresarios para evitar su denuncia. Pablo Puche, en su segunda denuncia por reclamación de salarios, hace alusión a las amenazas de su patrono: «me ha dicho, después de la

---

<sup>6229</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 20 de octubre de 1939), ARV, 1.074, exp. 1.500.

<sup>6230</sup> Alfredo MONTOYA MELGAR: *Ideología y lenguaje...*, p. 296.

<sup>6231</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 7 de octubre de 1939), ARV, 503, exp. 1.159.

<sup>6232</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 6 de octubre de 1939), ARV, 503, exp. 1.154.

<sup>6233</sup> Ignacio SERRANO SERRANO: *El Fuero del Trabajo: doctrina y comentario*, Valladolid, Gráficas Andrés Martín, 1939, p. 57.

<sup>6234</sup> Víctor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: «Principios fundamentales del proceso del trabajo», *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo*, 41-42 (1946), pp. 25-114, esp. p. 25.



negativa a abonarme tales cantidades, que no se me ocurriera reclamar por la vía legal, como ahora lo hago, ya que en este caso ‘me pasarían a otro cargo distinto, peor a mis intereses y derechos, y a mi estado de salud’»<sup>6235</sup>. Vicenta Ortí testimonia estas mismas presiones del patrono, al amparo de la situación política: «manifestándome últimamente dicho Administrador que cuanto menos recurriera mejor, pues tiene muchas amistades en Falange y no lograría conseguir nada»<sup>6236</sup>. De hecho, la denuncia fue desistida. Muestra del miedo a una posible desavenencia con la empresa es el expediente de denuncia de María Portalés, Federico Gómez López y Vicente Aliño contra la Industria arrocera «J. Pascual y Hermano». Estos prefieren renunciar a la continuación del proceso de demanda antes que se haga llegar la misma a la empresa: «De entre el personal de la Casa (...) son varios los que están esperando Justicia, pero ninguno desea llegar a una tirantez de careo que se originaría inmediata e irremisiblemente en dicho acto, al defender cada parte su derecho. Por lo tanto, deseando con todo nuestro ánimo el que la reclamación presentada (...) no sea principio de nuevos y enconados enojos y rencores, antes de presentarnos a dicho acto, preferimos renunciar a nuestros derechos de demanda». No debe pasarse por alto lo que esta cita significa: el trabajador renuncia a sus derechos laborales ante el temor de desavenencia con la empresa. Incluso podemos encontrar en este expediente un ademán de protesta contra la política social del régimen: «apreciamos sería más cordial, más cristiano, y más humano y descartaría todo rozamiento posible ayudando a una mayor cordialidad social, el que esta clase de demandas fueran acogidas y solucionadas con la intervención directa de un DELEGADO INSPECTOR que cumpliera su misión de investigación de la verdad en desconocimiento absoluto por parte del Empresario de quién fuera el demandante»<sup>6237</sup>.

### **La política social del régimen a través de los tribunales**

Ya hemos dicho que los tribunales de trabajo, tanto los Jurados Mixtos de la Segunda República como las Magistraturas de Trabajo de la dictadura franquista, constituyeron una parte fundamental de la política social de ambos regímenes. Las sentencias recogidas en los expedientes de uno y otro tribunal nos permiten analizar bajo qué criterios y principios teóricos actuaron, en la práctica, estas instituciones. Por supuesto, dicha actuación iba a estar condicionada por los principios de política social propios del régimen que los amparaba. ¿Puede hablarse de politización de estos órganos judiciales? Desde luego de ello fueron acusados los Jurados Mixtos. Ya desde antes de la guerra se escucharon voces críticas en contra de una supuesta parcialidad socialista<sup>6238</sup>. Durante la guerra, en las actas de juicio y en los recursos de los empresarios, estos se quejan de la excesiva dureza de las leyes sociales en contra de los intereses patronales. Es el caso del recurso elevado por Jesús Martínez contra la decisión del tribunal de Jurado Mixto de la Industria Hotelera, sector panadería, favorable a los tres obreros demandantes: «las leyes sociales están dictadas por un espíritu equitativo que defiende lo mismo el derecho del obrero atropellado que los intereses del patrono a quien se quiere explotar aprovechando una época de exaltación proletaria»<sup>6239</sup>. En la misma línea, el empresario Ricardo Perelló afirmaba que «dictando fallos en que se declaran probados, hechos, que con elementos probatorios irrefutables, queda demostrada su inexactitud,

<sup>6235</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 3 de octubre de 1939), ARV, 1.073, exp. 1.128.

<sup>6236</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 18 de noviembre de 1939), ARV, 1.076, exp. 1.394.

<sup>6237</sup> Magistraturas del Trabajo, n.º 1 (Valencia, 14 de agosto de 1939), ARV, 500, exp. 877.

<sup>6238</sup> Carlos GARCÍA OVIEDO: *Tratado elemental de Derecho Social*, Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1934, pp. 524-525.

<sup>6239</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Panaderías (Valencia, 14 de octubre de 1938), ARV, 197, exp. 7.760.

(...) con ello se contribuye al descrédito de la institución y al perjuicio de los propios obreros, que, como los demandantes, han obrado oscurecidos como instrumento de la pasión política de dirigentes a quienes no guía sino un interés egoísta y personal»<sup>6240</sup>.

Es difícil determinar, dada la cantidad de expedientes, si los Jurados Mixtos actuaron en beneficio de los obreros y en contra de los patronos. La estadística nos dice que el porcentaje de sentencias favorables al obrero se reduce considerablemente entre el bienio reformista y el radical-cedista, pasando de un 73,04% en 1932 a un 47,38% en 1934 (con un 10,21% favorable en parte al obrero)<sup>6241</sup>. La diferencia es aún más significativa si lo comparamos con el porcentaje de sentencias favorables de las Magistraturas de trabajo durante la dictadura. En 1940 tan solo el 16% de las sentencias fueron dictadas a favor del obrero. Entre 1940 y 1958, el máximo se alcanza en 1947 (22,5%), pero la media en ese periodo apenas sobrepasa el 18%<sup>6242</sup>. No disponemos de estadísticas para el periodo de la guerra civil, pero sí me gustaría señalar dos ejemplos en los que los Jurados Mixtos republicanos intentaron ajustarse al derecho laboral y evitar así su politización, pese a las desfavorables condiciones en las que actuaron. En el primer caso, los Jurados defienden su incompetencia en caso de denuncia política de una de las partes. El sindicato UGT, Sociedad de Panaderos, denunció al obrero demandante como colaborador fascista, por lo que no aceptaban la resolución a su favor emanada de la sentencia. En una Providencia digna de citar íntegramente, el juez alegó: «oficiase a tal Sociedad en el sentido de que lo actuado por el Jurado en el expediente en el mismo referido de Antonio Chuliá contra Eduardo Benetó por despido, se redujo a dar estado legal a una avenencia libremente acordada por las partes consistente en la readmisión del obrero por el patrono en el trabajo que prestaba, y contestar a aquellos otros extremos del escrito aludido que hacer referencia a la filiación política del demandante Antonio Chuliá, manifestando que esta cuestión compete a otras Autoridades de la República a las que deberá comunicarlo, absteniendo este Organismo de mezclar en el desempeño de su función la cuestión (filiación) política de los que a él acuden, la que queda como ya se dice a cargo exclusivo de otras autoridades, como bien manifestado lo tiene así el Gobierno de la República, para casos de desafección a esta»<sup>6243</sup>. En el otro ejemplo, el juez invita a las partes a llegar a un acuerdo para dar ejemplo de conciliación en un momento de guerra fratricida, incluso aludiendo a una reconstrucción nacional futura: «La presidencia invitó a ambas partes a que, considerando la circunstancia conciliatoria del Acto que se está celebrando, reflexionen acerca de lo procedente que sería llegar a una conciliación que refleje, no ya la buena disposición, porque esta existe, de ambas partes, sino el espíritu de confraternidad y transigencia deseables que eviten o hagan innecesario la colisión de intereses entre elementos representantes de empresa y trabajadores en circunstancias como las presentes, en que la serenidad, comprensión y espíritu de sacrificio son, no solamente necesarios sino imprescindibles a la marcha de nuestra República y que a la vez den la seguridad de que esta comprensión y espíritu de sacrificio son síntomas que denuncian la capacitación para un futuro reconstructivo de nuestra querida Nación»<sup>6244</sup>. Lo que es evidente es que los jueces del régimen republicano, que recordamos se proclamaba como «República democrática de trabajadores de toda clase» en el artículo 1.º de su Constitución, hicieron hincapié en los derechos sociales de los trabajadores. En diversas sentencias se habla del «carácter de irrenunciables en cuanto a los derechos del obrero»<sup>6245</sup>, o de «la índole especial del derecho social»<sup>6246</sup>.

---

<sup>6240</sup> Jurados Mixtos. Obras Públicas (Valencia, 11 de abril de 1936), ARV, 243, exp. 10.347.

<sup>6241</sup> Juan MONTERO AROCA: *Los tribunales de trabajo...*, p. 168.

<sup>6242</sup> José BABIANO: *Paternalismo industrial...*, p. 54.

<sup>6243</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Panadería (Valencia, 21 de mayo de 1937), ARV, 197, exp. 7.752.

<sup>6244</sup> Jurados Mixtos. Transportes terrestres. Tracción mecánica (Valencia, 13 de julio de 1937), ARV, 283, exp. 11.557.

<sup>6245</sup> Jurados Mixtos. Comercio en general (Valencia, 13 de junio de 1938), ARV, 52, exp. 2.002.

<sup>6246</sup> Jurados Mixtos. Despachos y oficinas, Seguros, Banca y Bolsa (Valencia, 19 de octubre de 1938), ARV, 155, exp. 5.249.

Las Magistraturas del Trabajo del franquismo, por su parte, observaron los principios del régimen: armonía y justicia social. En este sentido, el régimen se encontraba ante cierta paradoja: cómo defender los derechos sociales del trabajador sin caer en la lucha de clases que tanto persiguió el régimen. Y es que, por mucha que fuera la complacencia con los empresarios, alguna vez tenían que darle la razón al trabajador. En algunos casos se saltó incluso el principio de la nulidad legal del periodo republicano para defender la justicia social del régimen y declarar a favor del trabajador: «no porque los hechos hayan ocurrido en periodo de dominación marxista dejarán de aplicarse estos principios, porque tampoco por ello deja de existir su incapacidad, ni ha sufrido mengua su derecho a la vida y a los medios necesarios para su consecución (...) y que se atienden y respetan más claramente en un Estado que los proclama supremos; y en el que aun reconociendo su importancia subordina la economía a la política -política de Justicia Social- y que da a los medios materiales su verdadero papel de MEDIO AL SERVICIO DE LA SUPREMA ENTIDAD PERSONA HUMANA» (subrayado y mayúscula suyo)<sup>6247</sup>. Incluso podemos documentar un caso, por supuesto no era la norma, en que se multa a un empresario por no cumplir la legislación social vigente: «Que las razones alegadas por el demandado para liberarse de la obligación de pagar las vacaciones retribuidas no tienen fuerza alguna por imperio de la Ley que no escusa de su cumplimiento por alegar ignorancia, y que en definitiva no son más que una sombra de excusa carente de eficacia y de realidad por cuanto a partir de la Liberación de esta ciudad y por los Organismos competentes se ha reiterado con publicidad expresiva las obligaciones sociales de los patronos»<sup>6248</sup>. Por otra parte, no debe obviarse que Falange movilizó a los trabajadores en la defensa de la justicia social, lo que ocasionó incluso enfrentamientos con algunos empresarios. Así, el Secretario General del Sindicato N.º 11 de la Delegación Provincial de Valencia presionó a la CNS de Valencia para que interviniese a favor de un trabajador de la CNT, acusado en el juicio de formar parte del comité que clandestinamente actuaba en el Taller, de organizar asambleas y resistencias huelguísticas en el taller: «solicitamos de esa Delegación Sindical vea la posibilidad de intervenir a fin de conseguir el fallo favorable que demandan nuestros principios de justicia social. Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista»<sup>6249</sup>. En otro caso, un obrero denuncia a su empresa por despido injustificado, considerando que el motivo real del despido se debió a «nombrarme Delegado del Personal Obrero y Asesor Técnico de dicha Fábrica, el camarada Delegado de la CNS de esta localidad, y querer que prevalezcan los derechos de los Obreros» frente a la arbitrariedad de la empresa<sup>6250</sup>.

En cualquier caso, y como afirma Carme Molinero<sup>6251</sup>, el discurso en torno a la política social se trató más bien de propaganda para captar a las masas que de un programa real y sistemático, aunque es evidente que los trabajadores salieron favorecidos en determinadas demandas.

## Mujeres ante los tribunales de trabajo

Si la proporción de trabajadores que denunciaban antes los Tribunales de trabajo durante la dictadura fue escasa (en Madrid apenas alcanzaba el 1% en 1950<sup>6252</sup>), el número de mujeres

<sup>6247</sup> Magistraturas del Trabajo, n.º 1 (Valencia, 17 de junio de 1939), ARV, 500, exp. 901.

<sup>6248</sup> Magistraturas del Trabajo, n.º 1 (Valencia, 13 y 15 de enero de 1941), ARV, 508, exps. 14 y 15.

<sup>6249</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 8 de marzo de 1940), 1077, exp. 141.

<sup>6250</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 29 de diciembre de 1939), 1076, exp. 1464.

<sup>6251</sup> Carme MOLINERO: *La captación de las masas: política social y propaganda en el régimen franquista*, Madrid, Cátedra, 2005. ÍD.: «El reclamo de la 'justicia social' en las políticas de consenso del régimen franquista», *Historia Social*, 56 (2006), pp. 93-110.

<sup>6252</sup> José BABIANO: *Emigrantes, cronómetros y huelgas...*, p. 216.

demandantes fue aún más inferior. No solo porque el número de trabajadoras era inferior al de los hombres, sino porque, como es bien sabido, el trabajo doméstico no estaba contemplado por la legislación laboral. Así se lo hizo saber la Magistratura de Trabajo a Ricarda Simarro, que se presenta en su demanda como «de profesión, labores» al servicio de Tomás Murillo Maicas, quien no le había pagado el primer mes de trabajo porque «le había estropeado la dicente un mantel de refresco, pequeño». En un auto del 24 de febrero de 1941, el Magistrado se declara incompetente ya que «esta Magistratura no puede conocer de las incidencias que resulten entre el sirviente y su empresario por estar excluidos aquellos de los beneficios del trámite de la legislación laboral»<sup>6253</sup>. Y así quedaba expuesto en el *Manual de procedimientos para las reclamaciones ante las Magistraturas del Trabajo*: «Las personas interesadas en la reclamación han de tener el concepto legal de empresarios u obreros (...) Se exceptúan: (...) Todas aquellas personas cuyos servicios sean de índole puramente doméstica»<sup>6254</sup>. Pese a no ser reconocido socialmente como un trabajo, el trabajo en negro era bastante habitual y resultaba imprescindible para la supervivencia del grupo doméstico en un contexto de hambre, racionamiento y estraperlo como el de los años cuarenta.

Es cierto que la legislación franquista no inventó ni la marginación del servicio doméstico ni la discriminación de la mujer en el ámbito de las relaciones laborales. En los trabajos de la Comisión de Reformas Sociales (1883), las actividades del hogar son concebidas como «no-trabajo» y, por tanto, no regulables. Asimismo, es evidente la aceptación del discurso de la domesticidad en el pensamiento obrero español. Un artículo publicado en 1884 en *La Democracia* vinculó, en nombre de los obreros, «la más débil mitad del género humano, el ángel del hogar» a las labores «propias de su sexo»<sup>6255</sup>. Ni siquiera en el contexto de guerra civil se llegó a romper las pautas culturales de género que condicionaban el mundo del trabajo para las mujeres. Si bien durante la guerra se fue imponiendo otra visión de la mujer como soldado de fábrica que cubría la escasez de mano de obra y la necesidad de brazos útiles por la marcha masiva de hombres al frente, la realidad es que la aceptación de la misma por parte de las centrales sindicales se hizo no sin reticencias, incluso de forma opresiva. Dolores Aguilar, trabajadora en una finca de Granada, afirmó que «los hombres a veces para humillarnos nos daban tareas que requerían un esfuerzo físico acentuado (...) No valoraban nuestro trabajo si este se apartaba de nuestras tareas de siempre»<sup>6256</sup>. En uno y otro periodo, es decir, tanto en los expedientes de Jurados Mixtos como el de las Magistraturas encontramos casos de malos tratos contra la mujer trabajadora: en el juicio de Rosalía Martínez contra su patrono, los testigos contestan por unanimidad que es cierto que «el día veintinueve de mayo último, y mientras la demandante se encontraba pegando unos fuelles, se le aproximó el demandado, diciéndole que el trabajar como ella lo hacía era hacer la ‘gosa’ («perra», en catalán), y que, por dicho motivo, sintiéndose ofendida la obrera, abandonó poco después el taller». En la sentencia de este caso se admite la existencia de maltrato y se condena al patrono a readmitir a la trabajadora: «del Veredicto y prueba practicada se desprende indudablemente la existencia de una falta de respeto, cuya gravedad es indudable, *teniendo en cuenta especialmente el sexo de la demandante*»<sup>6257</sup> (cursiva mía). Ya en el periodo de la dictadura encontramos el caso de María Azorín, aprendiz de zurcidora, quien denuncia su dura situación laboral, al arbitrio de su patrona, y la revancha de esta por haberla denunciado ante la Magistratura: «cumpliendo con exceso mi deber, ya que como es notorio, y al igual que las demás dependientas, trabajamos muchas más

<sup>6253</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 2 (Valencia, 19 de febrero de 1941), ARV, 1.082, exp. 62.

<sup>6254</sup> Luis ÁLVAREZ DE URRIBARI: *Manual de procedimientos para las reclamaciones ante la magistratura de trabajo: formularios*, Ciudad Real, La Editorial Calatrava, 1939, p. 10.

<sup>6255</sup> Mary NASH: «El mundo de las trabajadoras: identidades, cultura de género y espacios de actuación», en José Antonio PIQUERAS, Francisco Javier PANIAGUA y Vicent SANZ (coords.): *Cultura social y política en el mundo del trabajo*, Alzira, UNED, 1999, p. 57.

<sup>6256</sup> Joan SERRALLONGA, Manuel SANTIRSO y Just CASAS (coords.): *Vivir en guerra. La zona leal a la República (1936-1939)*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013, p. 229.

<sup>6257</sup> Jurados Mixtos. Vestido y tocado. Marroquinería (Valencia, 29 de mayo de 1936), ARV, 302, exp. 12.210.

horas de la jornada legal, incluso los domingos, y efectuamos trabajos impropios del cargo, como es el fregado de pisos y faenas domésticas que para nada me afectaban. Debido a este exceso de trabajo caí enferma el día 22 de noviembre del pasado año, viéndome obligada a dejar de asistir al establecimiento durante los días que duró mi enfermedad (...) Al volver a prestar mi servicio el día 27 de enero último, y sin otro motivo que mi ausencia obligada y perfectamente justificada, fui despedida». Además y pese a que la demandante no lo denuncia, del historial de vida laboral se entiende que el salario de la obrera variaba a gusto de su patrona, ya que de las 6,50 pesetas diarias que cobraba como dependienta, pasó a cobrar 5 pts., tras la aprobación de la ley de Jefatura del Estado que ordenaba a los patronos satisfacer a sus obreros el jornal del domingo. La demandante denunció su despido injustificado y pese que la Magistratura le dio la razón, fue «objeto de las burlas y reproches de esta señora, la que dijo toda clase de inconveniencias, subiendo de tono hasta plantarme en la calle (...) contraviniendo con ello el acuerdo llevado a efecto en el acto de conciliación que era el de seguir en el mismo trabajo que venía realizando. A pesar de ello, (...) me humillé a volver aquella misma tarde con súplicas a Doña Margarita Jusserand (su patrona), pidiéndole olvidase lo ocurrido y me admitiese de nuevo, mas en esta segunda tentativa salí peor que en la primera, ya que no solo fui objeto de burlas e ironías, sino también de insultos e injurias para cuya reparación me propongo acudir ante los Tribunales de Justicia, insultos que hizo extensivos a mis padres y familiares a quienes tan siquiera conoce»<sup>6258</sup>.

No obstante, conviene hacer hincapié en el hecho de que el franquismo llevó al extremo un fenómeno anterior, el de la discriminación de la mujer en el trabajo. Es de sobra conocida la cita del Fuero del Trabajo: «El Estado (...) libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica». Menos conocido es la limitación establecida para comparecer en juicio ante la Magistratura de Trabajo. Solo podían comparecer los obreros mayores de 18 años y «las obreras, solteras, también mayores de 18 años. En las casadas, la autorización marital se presume mientras el marido no se oponga; caso en el cual, si acudiera al Tribunal con este propósito, el Magistrado de Trabajo, después de oír a una y otro, la concederá o denegará. Si vivieran separados de hecho o de derecho, la mujer no necesita autorización»<sup>6259</sup>. Por su parte, el Decreto de 1 de abril de 1939 fijaba la regla de que «en igualdad de circunstancias (...) se despedirá en primer lugar al personal femenino», mientras que una Orden Ministerial de 17 de noviembre de ese mismo año se mostraba claramente opuesta a la presencia de la mujer en el trabajo: «En la época actual son muchas las mujeres que, en busca de independencia económica, se inscriben en las Oficinas de Colocación, pero no tienen a su cargo obligación alguna», por lo que «la misión tutelar del Estado no puede llegar a amparar estos casos»<sup>6260</sup>. La obligación, efectivamente, era la del padre, lo cual sancionaba la importancia de la comunidad familiar por encima del individuo, así como su carácter patriarcal y católico. Al frente de la unidad familiar se situaba el padre y la mujer quedaba relegada a la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. El ilustre ministro de Trabajo del franquismo, José Antonio Girón, concebía los beneficios del Seguro de Maternidad en estos términos: «La mujer no tiene que desplazarse al taller o a la fábrica y puede atender a la formación espiritual y moral del niño. La vida del hogar (...) debe ser la suya (...) En otro orden, el retorno de las mujeres casadas a la vida familiar disminuye el paro»<sup>6261</sup>. Estas concepciones no eran ajenas a los empresarios, que podían negarse a dar trabajo a mujeres casadas o despedirlas en caso de que su marido trabajase. Tal es el caso de Mercedes Paredes, quien denuncia que se le despidió porque «trabajaba su marido y no necesitaba

---

<sup>6258</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 7 de febrero de 1941), ARV, 508, exp. 41.

<sup>6259</sup> Luis ÁLVAREZ DE URRIBARI: *Manual de procedimientos...*, p. 15.

<sup>6260</sup> Alfredo MONTOYA MELGAR: *Ideología y lenguaje en las leyes...*, pp. 334 y 337.

<sup>6261</sup> José Antonio GIRÓN: *Escritos y discursos*, Madrid, Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular, 1943, pp. 58-59.

jornal». Finalmente no fue readmitida, y se conformó con la indemnización de 125 pesetas (cobraba 7'50 semanalmente)<sup>6262</sup>.

En este contexto, la situación de la mujer se concretó, jurídicamente hablando, en su práctica inexistencia como sujeto particular de derechos laborales<sup>6263</sup>. Y no solo jurídicamente. El cierto empoderamiento de la mujer durante la guerra no lo vemos en los casos analizados en las Magistraturas. Faltaría vaciar más fuentes, pero podemos constatar que en el muestreo realizado no encontramos apenas casos, a excepción de los accidentados de trabajo (en la que la demandante actuaba en nombre de su marido fallecido), en los que la mujer llegue a juicio en su demanda. Durante la guerra, en cambio, encontramos casos de mujeres que se enfrentan decididamente contra las presiones de sus patronos. La cocinera Virginia Torres denuncia que el demandado «no pagaba en arreglo a las bases, y que si quería continuar en su casa que rompiese el carnet sindical, a lo que yo me negué». Finalmente, la trabajadora llegó a un acuerdo con el demandado a razón de 1.250 pesetas, cuando la deuda ascendía a 2.470<sup>6264</sup>. En otro caso similar, un grupo de mujeres, peluqueras de profesión, denuncian que su patrono se niega a pagar «en represalias de las nuevas bases de trabajo», incluso una de ellas (Angelita Brau) llega a denunciar que «dicho Señor me ha presionado para seguir infringiendo las nuevas bases y, no transigiendo a sus deseos, me ha despedido»<sup>6265</sup>. La fuerza de grupo también es patente en el caso de las denuncias de 14 mujeres que se presentan como «oficialas» de bordaje contra una fábrica que había quebrado y les había dejado sin trabajo<sup>6266</sup>.

---

<sup>6262</sup> Magistraturas del Trabajo, N.º 1 (Valencia, 29 de agosto de 1941), ARV, 508, exp. 537.

<sup>6263</sup> Josefa Dolores RUIZ RESA: *Trabajo y franquismo...*, p. 142.

<sup>6264</sup> Jurados Mixtos. Industria hostelera y artes blancas. Cocineros (Valencia, 25 de marzo de 1938), ARV, 189, exp. 6.799.

<sup>6265</sup> Jurados Mixtos. Servicios de higiene (Valencia, julio-agosto de 1936), ARV, 310, exps. 12.591-12.602.

<sup>6266</sup> Jurados Mixtos. Vestido y tocado. Bordadoras (Valencia, 26 de mayo de 1936), ARV, 302, exp. 12.211.